

en sus propios términos el fallo de la sentencia dictada con fecha 21 de mayo de 1984, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Granada en el recurso contencioso-administrativo número 292 de 1979, promovido por don Eduardo Jáuregui Boado y doña María de los Desamparados Serra Colomer, representados por el Procurador don Rafael García Valdecasas Ruiz y dirigidos por Letrado, contra la denegación presunta de la petición que los interesados formularon y denunciaron la mora por escrito de 29 de enero de 1979 a la Presidencia del Gobierno, y que tenía por objeto la rectificación de la interinidad declarada en la relación de empleo que con la Administración les unía, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Rafael García Valdecasas Ruiz, en nombre de don Eduardo Jáuregui Boado y doña María de los Desamparados Serra Colomer, contra la denegación presunta de la petición que los interesados formularon y denunciaron la mora por escrito de 29 de enero de 1979 a la Presidencia del Gobierno, y que tenía por objeto la rectificación de la interinidad declarada en la relación de empleo que con la Administración les unía, debemos anular y anulamos tal denegación presunta por no resultar conforme a derecho, declarando la procedencia de la rectificación que los recurrentes interesan en base y a partir de las propias declaraciones anteriores de la Administración que fueron indebidamente alteradas por el acuerdo de 20 de septiembre de 1974, y que los reconozca como Subalterno y Administrativo con plaza en propiedad, respectivamente; sin que proceda hacer declaración específica sobre los demás extremos que genéricamente interesan. Sin que haya lugar a expresa imposición de costas.»

Lo que digo a VV. EE.

Dios guarde a VV. EE.

Madrid, 15 de enero de 1985.—El Subsecretario, Francisco Javier Díe Lamana.

Excmos. Sres. ...

1663

RESOLUCION de 15 de enero de 1985, de la Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Consuelo García Yanes y tres más, representados por el Procurador don Francisco Sánchez Sanz.

Excmos. Sres.: De orden delegada por el excelentísimo señor Ministro se publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia dictada con fecha 8 de junio de 1984, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 22.478-P, promovido por doña Consuelo García Yanes, doña Leonor Arias Talavera, doña África Sánchez-Tirado Luque y doña Guillermina Sandoval Martín, representadas por el Procurador don Francisco Sánchez Sanz, contra la resolución del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de 18 de julio de 1980, desestimatoria de los recursos de reposición interpuestos contra la Orden del citado Ministerio de 10 de febrero de 1977; sobre relación definitiva de funcionarios de Organismos autónomos, afectados por la disposición transitoria del Decreto 3476/1974, de 20 de diciembre; cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que desestimando la causa de inadmisibilidad invocada por la Abogacía del Estado, así como el actual recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor Sánchez Sanz, en nombre y representación de las demandantes doña Consuelo García Yanes, doña Leonor Arias Talavera, doña África Sánchez-Tirado Luque y doña Guillermina Sandoval Martín, frente a la demandada Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía, contra la Orden del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de 10 de febrero de 1977 y la resolución del mismo Organismo de 18 de julio de 1980, a las que la demanda se contrae; debemos declarar y declaramos ser conformes a derecho y, por consiguiente, mantenemos los referidos actos administrativos al presente combatidos; todo ello sin hacer una expresa declaración de condena en costas, respecto de las derivadas de este proceso jurisdiccional.»

Lo que digo a VV. EE.

Dios guarde a VV. EE.

Madrid, 15 de enero de 1985.—El Subsecretario, Francisco Javier Díe Lamana.

Excmos. Sres. ...

MINISTERIO DE DEFENSA

1664

ORDEN 111/02192/1984, de 30 de noviembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 5 de marzo de 1984, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Antonio Giraldo Ruiz.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don José Antonio Giraldo Ruiz, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resolución del Ministerio de Defensa de 23 de enero de 1981, se ha dictado sentencia, con fecha 5 de marzo de 1984, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Antonio Giraldo Ruiz contra resolución del Ministerio de Defensa de 23 de enero de 1981, sobre proporcionalidad; sin imposición de costas.»

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. E.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 30 de noviembre de 1984.—P. D., el Director general de personal, Federico Michavilla Pallarés.

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME).

1665

ORDEN 111/02193/1984, de 30 de noviembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 5 de marzo de 1984, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José González Sánchez.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don José González Sánchez, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resolución del Ministerio de Defensa de 23 de enero de 1981, se ha dictado sentencia, con fecha 5 de marzo de 1984, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José González Sánchez contra resolución del Ministerio de Defensa de 23 de enero de 1981, sobre proporcionalidad; sin imposición de costas.»

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. E.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 30 de noviembre de 1984.—P. D., el Director general de Personal, Federico Michavilla Pallarés.

Excmo. Sr. Teniente general Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME).

1666

ORDEN 111/02194/1984, de 30 de noviembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 8 de abril de 1984, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Juan López Berzosa.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Juan López Berzosa, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra Resolución del Mini-